

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)**

Marzo 17 de 2022: Al despacho el proceso contra **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** identificado con C.C. No. 80.282.735, informando que en la fecha se recibe a través correo institucional de este Juzgado, la documentación emitida por las directivas de la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca con solicitud de libertad por pena cumplida y reconocimiento de redención de pena a favor del condenado. Sírvase proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA**

Marzo diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0156

Radicado CUI:	258756100000201700007
Sentenciado:	HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO
Identificación:	80.282.735
Sitio de Reclusión:	CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD VILLET A CUNDINAMARCA
Motivo:	Solicitud de Libertad Pena Cumplida y reconocimiento de redención de pena
Decisión:	CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA RECONOCE REDENCIÓN DE PENA POR TRABAJO

1.- OBJETO A DECIDIR

Procede el despacho a pronunciarse sobre el reconocimiento de redención de pena y el cumplimiento de la pena impuesta a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO identificado con C.C. No. 80.282.735** quien se encuentra privado de la libertad en la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Villeta Cundinamarca.

2.- CUESTIÓN PREVIA

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, en la actualidad no es posible llevar a cabo las mismas debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura técnica y física para ello. Cabe destacar de igual manera que la misma Ley -1709 de 2014- concedió un término de un (01) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la U.S.P.E.C. para implementar el sistema. Por lo anterior procede el juzgado a pronunciarse sobre el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes.

3.- RESEÑA PROCESAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Por hechos ocurridos el 23 de agosto de 2016 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas Cundinamarca en sentencia del 2 de noviembre de 2017, condenó a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** por el delito de **TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE D ESTUPEFACIENTES** a la pena principal de **TREINTA Y DOS (32) MESES DE PRISIÓN** y como pena accesoria la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de tiempo igual al de la pena principal impuesta. El Juzgado fallador negó al infractor la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por no cumplir con los requisitos legales. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 2 de noviembre de 2017.

Este Juzgado avocó conocimiento del asunto el 16 de noviembre de 2017 y por auto interlocutorio No. 1017 del 30 de noviembre de 2017, este despacho resolvió reconocer redención de pena por 3 meses y 19 días a favor del sentenciado y se ordenó comisionar al asistente social del Juzgado de Familia de Villeta para realizar la visita socio-familiar previo a la concesión de la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P. -

Mediante auto interlocutorio No. 0061 del 1 de febrero de 2018 este juzgado reconoció al condenado redención de pena de 33.5 días y por auto interlocutorio No. 0062 de la misma fecha negó la libertad condicional por concepto desfavorable.

Esta agencia judicial mediante auto interlocutorio No. 0063 emitido el 1 de febrero de 2018, concedió al prenombrado la prisión domiciliaria art 38 G del C.P., por lo que el condenado prestó caución el 14 de febrero de 2018 y suscribió diligencia de compromiso el 15 de febrero de 2022.

Con fecha 17 de septiembre de 2018 se recibió oficio No. 127 EPMSCVILL-AJUR-867-2016 proveniente de la Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Villeta Cundinamarca, informando que el condenado de la referencia había ingresado a esa penitenciaría el 17 de septiembre de 2018 en cumplimiento de la boleta de detención 018 del 15 de septiembre de 2018 suscrita por el Juzgado Promiscuo Municipal de Utica Cundinamarca, dentro del radicado CUI 258756108013201880256, delito Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.

Por lo tanto, mediante auto de sustanciación No 1064 del 28 de septiembre de 2018 se corrió el traslado al sentenciado par que rindiera sus descargos del porque había cometido nuevo ilícito, con fecha 17 de octubre de 2018 la CPMS Villeta lo enteró de la decisión, pero no presentó explicaciones con respecto al delito cometido.

Mediante auto interlocutorio No. 0335 del 23 de abril de 2019 este Juzgado, REVOCÓ al condenado el mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria concedida por esta agencia judicial, debiendo purgar el resto de la pena, es decir, 3 meses y 3.5 días de manera intramural.

A través de auto de sustanciación No. 1770 del 18 de septiembre de 2019, este despacho dispuso oficiar al señor director del EPC Villeta, con el fin de solicitar de que una vez cesaran los motivos por los cuales se encontraba recluido en este establecimiento, se dejara a disposición dentro del presente asunto para que cumpliera con el resto del tiempo que le queda por cumplir (3 meses y 3.5 días) y se libró ORDEN DE CAPTURA oficio No. 4163 y 4164.

En consecuencia, este Juzgado mediante auto de sustanciación No. 0982 de fecha 28 de diciembre de 2021, legalizó la disposición del condenado con Boleta de Encarcelación No. 085 ante el señor director del EPC Villeta Cundinamarca.

HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto en dos oportunidades: **i) del 22 de septiembre de 2016 hasta el 14 de septiembre de 2018**, fecha en la que fue capturado por la comisión del delito radicado CUI



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

258756108013201880256 y ii) desde el 28 de diciembre de 2021 (fecha en la cual este Juzgado legalizó la disposición del condenado ante el EPMSC Villeta)

En la presente oportunidad procede el juzgado a pronunciarse sobre la posible libertad por pena cumplida y reconocimiento de redención de pena a favor del condenado.

3.1. SOBRE EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020¹ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 - , por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, Y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico traemos a colación de la Ley 65 de 1993 lo siguiente:

"ARTÍCULO 104. ACCESO A LA SALUD. <Artículo modificado por el artículo 65 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicas o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.

¹ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En todos los centros de reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.

Se garantizará el tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de acuerdo a la necesidad específica.”

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 546 de 2020, mediante el cual adoptó *“medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*.

Por lo anterior, es diáfano que las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión.

4.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la posible libertad por pena cumplida y el reconocimiento de redención de pena a favor del condenado, conforme lo señalan los numerales 1º, 3º y 4º, del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar privado de la libertad en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007².

Según los hechos (23 de agosto de 2016) el infractor fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 (reformada por la Ley 1142 de 2007, 1453, 1474 de 2011) y 906 de 2004, con las modificaciones de la Ley 1709 de 2014.

4.2. DE LA REDENCIÓN DE PENA

² 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)².

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

La Ley 1709 del 20 de enero de 2014 a través del artículo 64, creó el artículo 103A para la Ley 65 de 1993 y señaló que la redención de pena es un derecho del que goza toda la población reclusa, luego entonces, sin importar el delito, a los condenados que cumplan los requisitos y certifiquen que han realizado las actividades de redención legalmente autorizadas, debe reconocérseles la redención de pena. Señala el artículo en mención:

*“(…) **ARTÍCULO 103A. DERECHO A LA REDENCIÓN.** <Artículo adicionado por el artículo 64 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> La redención de pena es un derecho que será exigible una vez la persona privada de la libertad cumpla los requisitos exigidos para acceder a ella. Todas las decisiones que afecten la redención de la pena, podrán controvertirse ante los Jueces competentes. (…)”*

A su vez el numeral 4 del artículo 38 (Ley 906 de 2004) señala que los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad conocen de la aprobación previa de las propuestas que formulen las autoridades penitenciarias y supongan una modificación en el cumplimiento de la pena o reducción del tiempo de privación efectiva de libertad.

El artículo 494 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) señala que corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, conceder al condenado la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza, de conformidad a lo previsto por artículo 101 del Código Penitenciario y Carcelario.

“(…) El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. (…)”

Resulta necesario traer a colación el contenido del artículo 82 de la Ley 65 de 1993, (Modificado por los artículos 60 y 61 de la Ley 1709 de 2014), cuyo tenor literal preceptúa:

*“(…) **ARTÍCULO 82. REDENCIÓN DE LA PENA POR TRABAJO.** El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.*

A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.

El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo. (…)”

Para el caso en particular se allegan de conformidad los numerales 4° y 5° del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, y con el numeral 4° del artículo 79 de la Ley 600 de 2000 en concordancia con la Resolución 2392 del 3 de mayo de 2006, el certificado de cómputo TEE, con las respectivas actas evaluativas de las actividades desarrolladas por el sentenciado junto con los correspondientes certificados de calificación de conducta, reuniéndose así los requisitos del artículo 101 de la Ley 65 de 1993.

Se procede entonces a realizar la redención de pena correspondiente teniendo en cuenta las horas de trabajo certificadas así:

No. Certificado de Cómputo	Periodo Certificado	Establecimiento Penitenciario y/o Carcelario	Horas de trabajo a reconocer	Calificación de la Labor	Calificación de Conducta

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

18431335	Del 1 de enero al 16 de marzo de 2022	CPMS Villeta – Regional Central	336	Sobresaliente	Buena
<u>TOTAL</u>			<u>336</u>		

Aplicando los parámetros de la Ley 65 de 1993 se tiene que las **336** horas por concepto de trabajo al hacer la conversión corresponden a **VEINTIUN (21) DÍAS** tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

En cuanto al certificado No. 18431335 comprendiendo el periodo entre el 1 de abril al 30 de abril de 2020 (40 horas – trabajo), este despacho **se ABSTIENE de emitir pronunciamiento en vista que dentro de la documentación no aparece el respectivo certificado de calificación de conducta de dicho lapso de tiempo.**

4.3. Sobre la Libertad por pena cumplida

Conforme a las actuaciones proferidas dentro del expediente y la documentación emitida por la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, se observa que **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto en dos oportunidades: **i) del 22 de septiembre de 2016 hasta el 14 de septiembre de 2018**, fecha en la que fue capturado por la comisión del delito radicado CUI 258756108013201880256 y **ii) desde el 28 de diciembre de 2021** (fecha en la cual este Juzgado legalizó la disposición del condenado ante el EPMSC Villeta) hasta la fecha, por lo que ha cumplido físicamente **VEINTISÉIS (26) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS** de la pena principal de prisión de **32 meses** impuesta.

El condenado cuenta con redención de pena de 4 meses y 22.5 días reconocidas en autos anteriores por este Juzgado y en el presente auto se reconoce 21 días de redención de pena, para un total de **5 meses y 13.5 días de redención de pena**.

En efecto, se tiene que del cumplimiento físico más las redenciones de pena reconocidas, de la pena principal de 32 meses de prisión, impuesta por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas Cundinamarca en sentencia emitida el 2 de noviembre de 2017, **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** cumple la pena de prisión a partir de la fecha, motivo por el cual se concederá la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.

Acorde con lo anterior y de conformidad con lo normado en el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) la Secretaría del Despacho oficiará a las entidades a las que se les comunicó la sentencia y se cancelarán las órdenes de captura que en su contra pudiesen existir por cuenta del presente asunto, rindiendo los informes de ley.

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

4.4 Sobre la Rehabilitación de las Penas Accesorias.

Este juzgado es competente para decidir de oficio sobre la rehabilitación de las penas accesorias conforme lo señalan los numerales de los artículos 92 (Ley 599 de 2000) 38-8 y 480 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al corresponder los juzgados de los Circuitos penitenciarios de Facatativá Cundinamarca conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007³.

³ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)³.



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Atendiendo los criterios de la Política Criminal el legislador estableció las consecuencias que se derivan de las conductas punibles como lo son las sanciones que acompañan a las penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. En efecto se clasifican como penas principales la privativa de libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros derechos. Conforme lo señala el artículo 36 del C.P., son penas sustitutivas la prisión domiciliaria como sustitutiva de la intramural y el arresto de fin de semana como sustitutivo de la multa. Por último dentro de las penas privativas de otros derechos se encuentra la de *“la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”*.

Efectivamente en el artículo 44 del C.P., la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las autoridades oficiales.

En este sentido la Sentencia C-581 de 2001 señala que son derechos políticos *“el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos, el de ejercer acciones públicas, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía”*.

Agrega que *“Ninguno de estos derechos es de carácter absoluto, como se expresó anteriormente, y para ejercerlos se requiere haber adquirido la calidad de ciudadano, la cual solamente se obtiene cuando se han cumplido los requisitos de nacionalidad y edad establecida por el legislador (18 años). Además, se requiere que aquella no haya sido suspendida.”*

En el presente asunto se tiene que se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del C.P., que establece:

“ARTICULO 92. LA REHABILITACION. La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesorio, operará conforme a las siguientes reglas:

1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.

2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.

Quando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política.” (Resalta fuera de texto)

Aterrizando al caso objeto de estudio, como se dijo en líneas anteriores el Despacho debe pronunciarse sobre la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de la pena privativa de la libertad, que se le impuso a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** en el fallo reseñado, encontramos que desde el **2 de noviembre de 2017**, fecha en la que quedó debidamente ejecutoriada la decisión condenatoria, comenzó a correr el término fijado, respecto a la inhabilitación de las penas accesorias, dicho término continuó durante el lapso impuesto (**32 meses de prisión**) hasta el pasado **2 DE JULIO DE 2020** fecha en la cual transcurrió el término previsto en la sentencia y en aplicación del numeral 1º de la norma en cita, la recuperación de estos derechos, tendrán que ser restablecidos.

Por lo tanto, éste funcionario desde ahora **RESTABLECERÁ** de inmediato todos los derechos jurídicos que en su momento fueron inhibidos por ello, conforme lo expresado en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

La libertad se hará efectiva para ante las directivas de la CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, **a partir de la fecha, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado REMITIR las presentes diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas Cundinamarca, para su archivo definitivo.

4.5. Sobre la comisión y notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** se encuentra recluso en la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, se ordena por la secretaría de este Despacho **COMISIONAR** a las directivas de dicho penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

Por la Secretaría del Juzgado, PROCÉDASE a librar la **BOLETA DE LIBERTAD** a favor de **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** identificado con C.C. No. 80.282.735, **a partir de la fecha** y ante las directivas de la **CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLET A CUNDINAMARCA, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD JUDICIAL, CASO EN EL CUAL SERÁ DEJADO INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.**

5. DE OTROS ASUNTOS

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, múltiples entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó conformado con un juez, un asistente social, un asistente administrativo, una secretaria y un sustanciador creado el pasado 9 de noviembre de 2020, para evacuar más de 4.450 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO, PONAL y de Funza, aparte de las prisiones domiciliarias.

De lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al estudio de la libertad condicional el cual tuvo múltiples entradas y salidas debido a las solicitudes que hicieron un estudio concienzudo de la situación.

5.1 De la Situación Actual del Juzgado

Por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020 y que en la actualidad nos encontramos organizando y ubicando los procesos.

Del mismo modo se tiene que mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 que autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“Autorizar el cierre extraordinario y suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive,* debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se está presentando en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, *se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.*

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y desde la semana pasada nos encontrábamos en el alistamiento de todos los expedientes para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización los cuales fueron trasladados por la empresa contratada.

Ahora, en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021, inclusive. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto y sin necesidad de ahondar en el asunto, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá, Cundinamarca,

RESUELVE

PRIMERO.- RECONOCER a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** identificado con C.C. No. 80.282.735, redención de pena por trabajo en equivalencia a **VEINTIUN (21) DÍAS**, por las actividades realizadas del 1 de enero al 16 de marzo de 2022, tiempo que se redimirá de la pena al sentenciado.

SEGUNDO – ABSTENERSE de emitir pronunciamiento con respecto al certificado No. 18431335 comprendiendo el periodo entre el 1 de abril al 30 de abril de 2020 (40 horas – trabajo), conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO.- RECONOCER que el sentenciado a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** identificado con C.C. No. 80.282.735 a la fecha cumple con el total de la pena de prisión de **32 meses** impuesta por el por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas Cundinamarca, en sentencia emitida el 2 de noviembre de 2017.

CUARTO.- CONCEDER a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO**, **LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA**, a partir de la fecha, conforme a lo consignado en la parte motiva del presente proveído.

QUINTO- En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto de manera precedente puede concluirse que es pertinente declarar extinguida la pena privativa de la libertad impuesta a **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO**, por lo que se decretará la extinción de la pena y su libertad inmediata, incondicional y definitiva.

SEXTO.- DECRETAR la **REHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS** impuesta en el fallo reseñado a partir del día **2 DE JULIO DE 2020**, a favor del sentenciado **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** identificado con C.C. No. 80.282.735, en aplicación de los artículos 43 y 92 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 480 de la Ley 906 de 2004.

SEPTIMO.- Teniendo en cuenta que **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO** se encuentra recluso en la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Villeta Cundinamarca, se ordena por la secretaría de este Despacho **COMISIONAR** a las directivas de dicho penal, con el fin de que se **NOTIFIQUE** personalmente al sentenciado el contenido del presente auto.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

OCTAVO.- ORDENAR que ejecutoriada esta decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo tal como lo dispone el artículo 476 del Código de Procedimiento Penal, (Ley 906 de 2004) para la actualización de los registros y antecedentes que por esta causa se originaron contra el referido sentenciado, y que se cancelen las órdenes de captura impartidas contra **HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO**, en razón de este proceso.

NOVENO.- En firme esta decisión, se ordena por la Secretaría del Juzgado REMITIR las presentes diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito de Guaduas Cundinamarca, para su archivo definitivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de Reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA




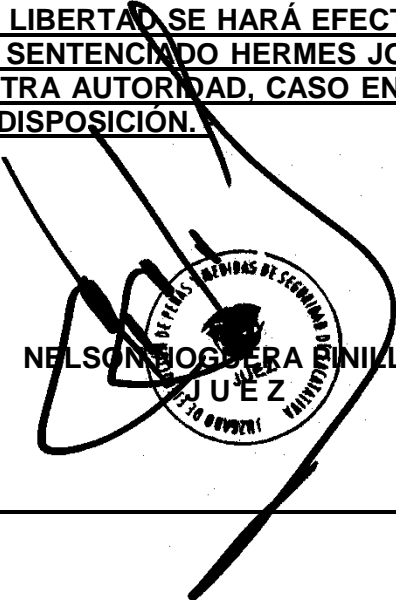
JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

BOLETA DE LIBERTAD No. 0037

FECHA	17 DE MARZO DE 2022
Señor Director: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE VILLETA CUNDINAMARCA.-	
Sírvasse poner en libertad a: HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO.-	
Cédula de Ciudadanía No: 80.282.735 EXPEDIDA EN VILLETA CUNDINAMARCA.-	
Lugar de nacimiento: TUNUNGUA BOYACA. -	
Fecha de Nacimiento: 28 DE ABRIL DE 1982. -	
Delitos: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.-	
Estado Civil: UNION LIBRE. -	
Profesión u oficio: N/A. -	
Nombres de los padres: HERMES ORDOÑEZ Y MARIA LUCILA RAYO.-	
Nombre del conyugue: LILIANA GARCIA PINILLA -	
Motivo de libertad: LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DE LA FECHA.-	
CUI: 258756100000201700007 -.	
Número Interno: 2017-0461.-	
Autoridades que conocieron: CUI 258756100000201700007: FISCALIA 2ª SECCIONAL DE VILLETA CUNDINAMARCA, JUZGADO 2º PROMISCOU MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA, JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE GUADUAS CUNDINAMARCA Y ESTE ESTRADO JUDICIAL 2017-0461.-	
OBSERVACIONES: ESTA LIBERTAD SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTENCIADO HERMES JOVANNY ORDOÑEZ RAYO, NO SEA REQUERIDO POR OTRA AUTORIDAD, CASO EN EL CUAL DEBERÁ DEJARSE INMEDIATAMENTE A SU DISPOSICIÓN.	
<div> NELSON BOGUERA PINILLOS JUEZ</div>	